

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA RELATIVO AL PROYECTO ORDEN DE XX DE XX DE 2024, POR LA QUE SE MODIFICA EL APARTADO 1 DEL ANEXO II DEL DECRETO 114/2014, DE 22 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL MARCO REGULADOR DE LAS AYUDAS A EMPRESAS QUE SE CONCEDAN POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA REALIZACIÓN DE INVERSIONES DE FINALIDAD REGIONAL.

El artículo 139.1 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas, tras la modificación operada por la Disposición Final Primera de la Ley 4/2021, de 27 de julio, de la Infancia y Adolescencia, establece que: *“Todos los proyectos de ley, disposiciones de carácter general que apruebe el Consejo de Gobierno y las demás disposiciones generales dictadas en desarrollo de las anteriores deberán tener en cuenta, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de género y del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su concreción en el resto de la normativa internacional, así como en la estatal y la autonómica que son aplicables en materia de menores. A tal fin, en la tramitación de las citadas disposiciones, deberá emitirse un informe de evaluación del impacto por razón de género y de evaluación de enfoque de los derechos de la infancia y la adolescencia sobre el contenido de las mismas”*.

En relación con este proyecto de Orden ha de tenerse en cuenta que el artículo 58.2.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva para el fomento y planificación de la actividad económica, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado; lo que permite adoptar medidas con este objetivo. Cuando dichas medidas consisten en la regulación y concesión de ayudas públicas, éstas deben respetar las previsiones del artículo 107.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y la normativa comunitaria dictada en desarrollo del artículo 107.3 del Tratado.

La adopción del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (Reglamento General de Exención) impulsó la adaptación del marco jurídico andaluz por medio de, entre otras normas, el Decreto 114/2014, de 22 de julio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía para la realización de Inversiones de Finalidad Regional.

En este sentido, el artículo 14.12 del citado Reglamento señala que la intensidad de ayuda no deberá ser superior a la intensidad máxima de ayuda establecida en el mapa de ayudas regionales que esté en vigor en el momento en que se conceda la ayuda en la zona de que se trate y en el apartado primero del Anexo II del Decreto 114/2014, de 22 de julio, se determina la intensidad máxima de las ayudas para las grandes, medianas y pequeñas empresas.

Por otro lado, la Disposición final primera del citado Decreto, en la redacción dada por el Decreto 225/2020, de 29 de diciembre, establece que «Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de acción exterior para acomodar los anexos de este decreto a las modificaciones que se lleven a cabo por la Comisión Europea. Con carácter particular, se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en

Avda. de Roma s/n
Palacio de San Telmo
41071 – Sevilla

FIRMADO POR	JOSE ENRIQUE MILLO ROCHER	05/02/2024	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	



materia de acción exterior para que, en su caso, por medio de orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, modifique el apartado 1 del Anexo II del presente decreto con el fin de ajustar la intensidad prevista en dicho apartado a la Decisión de la Comisión Europea por la que se autorice el mapa de ayudas regionales para España para el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2027.»

El sexto párrafo de la parte expositiva del Decreto 225/2020, de 29 de diciembre, señalaba que la citada habilitación tenía su causa en la necesidad de adaptación de las citadas intensidades a lo previsto en la Decisión de la Comisión por la que se autorice el mapa de ayudas regionales para España en aplicación del artículo 107, apartado 3, letras a) y c) del Tratado para el período comprendido hasta el 31 de diciembre de 2027. Y, en este sentido, la parte expositiva continuaba señalando que, en la medida en que dicha decisión podía tener incidencia en la intensidad máxima aplicable a las ayudas contempladas en el Decreto, debía habilitarse un procedimiento que adaptase las intensidades previstas en el Decreto a las intensidades indicadas en la Decisión de la Comisión Europea del modo más ágil posible. Además, se establecía que la aplicabilidad directa del Reglamento UE 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, que remite a que determinadas intensidades se fijen en función de la Decisión por la que se autoricen los mapas nacionales de ayudas de finalidad regional y el carácter obligatorio de la citada Decisión, todo ello de conformidad al artículo 288 TFUE, amparaban la habilitación del procedimiento acelerado de adaptación de los decretos mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de acción exterior.

En consecuencia, y en la medida en que mediante la Decisión SA.109336 de la Comisión Europea establece, respecto de la intensidad actual, un incremento del 10 % en las intensidades permitidas para las ayudas de finalidad regional en Andalucía desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027, se considera necesario acomodar las intensidades previstas en el apartado primero del Anexo II del Decreto 114/2014, de 22 de julio, a lo previsto en dicha Decisión de la Comisión Europea por medio de la presente Orden con base en la habilitación recogida en la Disposición final primera del citado Decreto.

Si bien la Decisión SA.109336 de la Comisión Europea es una disposición obligatoria, conforme al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se considera necesario adaptar los porcentajes máximos de ayuda previstos en el Decreto a lo indicado en la Decisión por razones de seguridad jurídica aun cuando la citada Decisión sea vinculante en todos sus elementos para todas las autoridades españolas sin necesidad de acto de incorporación de su contenido al derecho interno.

Por todo ello, en aplicación de lo expuesto y de lo previsto en el Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, así como lo dispuesto en el segundo párrafo de su artículo 4.1, este centro directivo no considera que este proyecto de Orden, sea susceptible de repercutir sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia ya que mediante esta reforma se pretende extender únicamente acomodar las intensidades máximas de ayuda a los umbrales determinados por la Comisión Europea.

El Secretario General de Acción Exterior, Unión Europea y Cooperación

Fdo. José Enrique Millo Rocher

FIRMADO POR	JOSE ENRIQUE MILLO ROCHER	05/02/2024	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	